REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE DURANGO

TEXTO ORIGINAL.

Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango, el jueves 8 de diciembre de 2011.

Objeto del Reglamento.

Así, con fundamento en las bases constitucionales y legales expresadas en el proemio y en los razonamientos formulados en los considerandos, he tenido a bien expedir e (sic) presente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE DURANGO.

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Este ordenamiento es de orden público e interés social y de observancia general en todo el Estado, y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia para el Estado de Durango, garantizando el acceso de las mujeres a los derechos que se prevén mediante los ejes de acción y modelos así como de los mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios, independientemente de la coordinación que se efectúe con la Federación, para el debido y cabal cumplimiento de la Ley.

ARTÍCULO 2.- Son sujetos de los derechos que establece la Ley, las mujeres que se encuentren dentro del territorio del Estado Libre y Soberano de Durango. Sin discriminación alguna en los términos que señala la Ley.

ARTÍCULO 3.- Todas las políticas públicas, mecanismos, medidas, disposiciones y protocolos que se implementen, buscan eliminar la violencia de género, en sus diversas modalidades y tipos de la violencia, en el ámbito público y privado en concordancia con la legislación nacional de la materia y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

ARTÍCULO 4.- Además de los principios contenidos en el artículo 5 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, para efectos del presente Reglamento, se consideraran como principios rectores que garantizan el acceso de las mujeres al derecho a una vida sin violencia.

I. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

II. El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres; y

III. La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones contenidas en el artículo 7 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, se entiende por:

I. Daño: Es la afectación o menoscabo que recibe una persona en su integridad física, psicoemocional o patrimonial, como consecuencia de la violencia de género;

II. Eje de acción: Las líneas operativas en torno a las cuales se articulan las políticas públicas en materia de violencia de género;

III. Estado de indefensión: La imposibilidad aprendida o adquirida de defensa de las mujeres para responder o repelar cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre ellas, como consecuencia de la desesperanza aprendida y condicionamiento social;

IV. Estado de riesgo: Implica la probabilidad de un ataque social, sexual, delictivo individual o colectivo, a partir de la construcción social de desigualdad y discriminación, que genera miedo, intimidación, incertidumbre o ansiedad ante un evento impredecible de violencia;

V. Ley: Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia para el Estado de Durango;

VI. Modelo: La representación conceptual o física de un proceso o sistema para analizar un elemento o fenómeno social determinado, en un momento concreto;

VII. Órdenes de protección: Las medidas preventivas, emergentes, precautorias y cautelares que se otorgan a las mujeres o a un tercero que viven violencia familiar o sexual exclusivamente;

VIII. Protocolo: La formalización de lineamientos y procedimientos sobre la política pública en materia de violencia de género;

IX. Reglamento: Reglamento de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia para el Estado de Durango;

X. Tolerancia de la violencia: La acción o inacción permisiva de la sociedad o de las instituciones que favorecen la existencia o permanencia de la violencia, incrementando la prevalencia de la discriminación y violencia de género;

XI. Victimización: El impacto psicoemocional de cada tipo y modalidad de la violencia hacia las mujeres.

XII. Contención del estrés: Es la intervención inmediata que se facilita al servidor público que se encuentra en un desequilibrio emocional debido al desempeño de sus funciones, con el objetivo de disminuir su estrés y que tenga una mejor percepción y solución de los casos que se le presenten.

ARTÍCULO 6.- Compete la aplicación de la Ley, a la Administración Pública Estatal y Municipal, en términos de sus competencias, por lo que expedirán los procedimientos, medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia e incorporarán los ejes de acción a la política pública, desarrollando la armonización normativa con las convenciones Belém Do Pará y la CEDAW.

CAPÍTULO II

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

ARTÍCULO 7.- Las políticas públicas serán las decisiones y consecuentes acciones que tome la Administración Pública Estatal y Municipal para atender, prevenir, sancionar y erradicarla violencia contra las mujeres en el Estado, a partir de las necesidades y diagnósticos que para tal efecto se determinen en el consejo.

ARTÍCULO 8.- Las políticas públicas que se requieran para cumplir con los fines de la Ley y del presente reglamento se implementaran mediante:

- I. La elaboración y operación de modelos por eje de acción;
- II. El programa estatal de atención, prevención, sanción, y erradicación.

ARTÍCULO 9.- La política estatal integral, considerara:

- I. Los Avances Legislativos con perspectiva de Género;
- II. Los criterios y lineamientos jurisdiccionales locales sobre los tipos y modalidades de la Violencia;
- III. Las áreas geográficas con comportamiento violento hacia las mujeres;

IV. Las formas de violencia más proclives; y

V. El comportamiento de Modelos desarrollados para la erradicación.

ARTÍCULO 10.- La política estatal integral se articulará en ejes de acción, con el propósito de hacer efectivo el derecho de acceso de las mujeres para acceder a una vida libre de todo tipo y forma de violencia, dichos ejes de acción serán:

I. Eje de Prevención;

II. Eje de Atención;

III. Eje de Sanción; y

IV. Eje de Erradicación.

CAPÍTULO III

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OPERAN LOS MODELOS

ARTÍCULO 11.- Los servidores públicos o profesionales que deseen estar debidamente acreditados por la secretaria del consejo, para la operación de los modelos y la prestación de servicios relacionados con la violencia de género, deberán:

I. Contar con capacitación en perspectiva y violencia de género;

II. Contar con las actitudes y aptitudes idóneas para la atención, libres de prejuicios y practicas estereotipadas de subordinación;

III. Ser evaluados psicológicamente en cuanto a dichas actitudes y aptitudes, por lo menos cada año;

IV. Ajustarse a los perfilogramas que establezca la secretaria del Consejo.

ARTÍCULO 12.- En el caso de que los profesionales, en psicología o abogados lo soliciten, o la Institución en la que laboran así lo determine podrán tener contención del estrés, generado a partir de la atención continua de asuntos vinculados con la materia del presente reglamento; los profesionistas que soliciten dicha contención o la institución que así lo determine justificarán su solicitud en base a que el personal que atiende violencia de género cuente con una o más de las características siguientes: agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta de realización personal en el trabajo.

Tal solicitud podrán efectuarla después de los 12 meses ininterrumpidos en dicho servicio, lo anterior sin perjuicio de que la administración pública estatal y municipal, efectúe dicha contención y haga la rotación de personal, para disminuir el estrés.

La solicitud será por escrito, argumentando el impacto que ha recibido con motivo del servicio, manifestando estar de acuerdo en que sea valorada o valorado psicológicamente, para acreditar dicho impacto.

ARTÍCULO 13.- La solicitud a que hace alusión el artículo anterior será presentada ante el superior jerárquico del centro de atención, o de la dependencia que está prestando el servicio, y previo dictamen psicológico realizado por parte del profesional que la institución designe, se podrá determinar:

- I. Cambio definitivo de actividad y servicio;
- II. Rotación a un servicio similar;
- III. Envío a contención del estrés o a psicoterapia, proporcionada por la institución.

CAPÍTULO IV

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS MUJERES

ARTÍCULO 14.- La Seguridad Pública deberá prestarse, con perspectiva de género, atendiendo en todo momento a la precaución razonable de seguridad pública que requieran las mujeres. Entendiendo que esta se presenta, cuando se tiene registrados dos o más eventos delictivos de la misma especie en un lapso no mayor a un mes, respecto de una mujer en particular, comunidad o zona específica.

ARTÍCULO 15.- La Seguridad Pública Estatal y Municipal conforme a sus competencias, prestarán la seguridad en base a los protocolos de actuación, los cuales señalarán los lineamientos y procedimientos respectivos.

ARTÍCULO 16.- Cualquier efectivo de los cuerpos de seguridad estatal y municipal deberá privilegiar la protección de las mujeres que viven violencia de género y abstenerse de:

- I. Prácticas de negociación, conciliación o mediación entre la víctima o receptora y el agresor o generador; y
- II. Acciones prejuiciosas o criterios de sumisión hacia la víctima o receptora.

ARTÍCULO 17.- Las propias Instituciones o Dependencias en acciones de monitoreo que observen el comportamiento violento de individuos que estén sometidos a algún proceso penal por algún tipo de violencia o juicio, o las instancias que tienen conocimiento de hechos violentos, evaluando los posibles riesgos para las mujeres favoreciendo las medidas de protección establecerán las medidas que correspondan, conforme a lo establecido en la Legislación aplicable.

ARTÍCULO 18.- Dicho monitoreo se vinculará de manera directa y efectiva con el Banco Estatal de Datos, así como los registros que se implementen sobre las órdenes de protección en el Estado de Durango y las personas sujetas a ellas, siendo una responsabilidad ineludible de las autoridades que generan la acción precautoria y cautelar informar a la instancia responsable del citado Banco.

ARTÍCULO 19.- La documentación e información en materia de seguridad es confidencial en los términos de la legislación aplicable por lo que todas las personas que con motivo de su empleo, servicio, cargo, comisión y funciones, tengan conocimiento de esta, tendrán la obligación de guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido, documentación e información respectivos, (sic)

TÍTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS ÁMBITOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ARTÍCULO 20.- Para los efectos de la violencia de género en el ámbito familiar, el Estado y sus Municipios establecerán:

- I. Centros de atención psicojurídica;
- II. Procedimientos de acreditación de la violencia familiar, en materia civil y penal, impulsando las reformas procesales adecuadas;
- III. Procedimientos arbitrales y administrativos para los casos donde no exista denuncia penal;
- IV. Vigilar que no se sometan casos de violencia de género a conciliación o mediación independientemente de la materia.

ARTÍCULO 21.- En tanto no se elimine la violencia de género y/o una práctica que atenta contra los derechos de las mujeres, el Estado y sus Municipios, establecerán la estrategia comunitaria, que incluya:

I. La percepción individual y como grupo de las mujeres del posible estado de riesgo en que se encuentran, por la discriminación;

II. El monitoreo de las poblaciones o municipios, donde haya un incremento de la violencia de género;

III. La cultura de la legalidad y de la denuncia de actos violentos, públicos o privados contra las mujeres;

IV. El registro de las ordenes de protección que se emitan por las autoridades administrativas, independientemente de las medidas precautorias o cautelares que determine el Poder Judicial con motivo de los juicios que se ventile ante sus juzgados, los cuales también se inscribirán en el registro único; y

V. La precaución razonable de seguridad pública que requieran las mujeres.

ARTÍCULO 22.- Son manifestaciones de la violencia de género en el ámbito laboral y escolar; el hostigamiento y acoso sexual, entendiéndose por hostigamiento sexual, el ejercicio del poder, mediante la violencia física, psicológica, sexual o económica sobre las mujeres a partir de la subordinación que se tiene respecto del patrón o docente independientemente del tipo penal consagrado en las leyes respectivas.

En el acoso sexual, no existe una subordinación, sólo el ejercicio del poder mediante los tipos de violencia que consagran esta ley, que generan o incrementan en las mujeres el estado de riesgo o el estado de indefensión, independientemente de que se realicen en uno o varios actos.

ARTÍCULO 23.- Las políticas públicas del Estado y de los Municipios en materia de violencia en el ámbito laboral y escolar independientemente de que pudiesen constituir dichas conductas algún ilícito penal, previsto y sancionado en la legislación de la materia, considerarán:

I. El impacto psicoemocional que generan en quien las sufre;

II. Las diferentes formas de discriminación que se pueden presentar en razón del género, edad, condición de las mujeres, estado civil, preferencia sexual;

III. La adhesión a convenios o protocolos para eliminar esta modalidad de violencia, por parte de sindicatos, empresas públicas o privadas y de la Administración Pública Paraestatal;

IV. La Evaluación de sus políticas públicas en forma volitiva, por parte de los sectores públicos, privados o sociales.

ARTÍCULO 24.- Para el caso de la violencia de género en el ámbito institucional, incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos del Estado y sus Municipios, que en el ejercicio de su cargo o comisión, contravengan los principios y disposiciones que consagra la Ley y el presente ordenamiento, o no den debido y cabal cumplimiento a las normas que de ella emanan, o bien lleven a cabo cualquier practica discriminatoria, o de tolerancia de la violencia de género, y serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por el (sic) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

ARTÍCULO 25.- El Estado y sus Municipios, implementaran acciones contra la violencia, incluyendo:

I. Políticas públicas para eliminar la violencia hacia las mujeres;

II. Disposiciones procesales o normativas que permitan el acceso a la justicia, mediante el reconocimiento de los derechos adjetivos de las mujeres en la legislación que sea procedente;

III. Mecanismos públicos para evitar la violencia de género en las instituciones, incluyendo la evaluación anual de la política pública y de los servicios institucionales públicos que se presten a las mujeres, independientemente del sector de que se trate;

IV. Programas de capacitación para el personal adscrito a las dependencias de procuración y administración de la justicia;

V. Celebración de bases de coordinación entre los Poderes del Estado y de los Municipios para los cambios conductuales y de percepción e interpretación de la Ley, de quienes colaboran para dichos Poderes.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

DE LOS MODELOS Y EJES DE ACCIÓN

ARTÍCULO 26.- En concordancia con la Política Nacional Integral, para la ejecución de la Ley y la articulación de la Política Estatal, los modelos se implementarán a partir de los ejes de acción y sus niveles de intervención conforme a la ley y al presente reglamento.

ARTÍCULO 27.- Todo modelo que se implemente a favor de las mujeres en el Estado, en cualquier modalidad y tipo de violencia deberá de:

- I. Ser gratuito y especializado;
- II. Atender integral e interdisciplinariamente con perspectiva de género;
- III. Contar con un enfoque psicojurídico y de restitución de los derechos de quien vive la violencia de género;
- IV. Fomentar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, al impulsar el uso de los derechos procesales de las mujeres contenidos en la legislación interna;
- V. Considerar las relaciones de poder, de desigualdad y discriminación que viven las mujeres, que mantienen el control y dominio sobre ellas y que pueden estar presentes en procedimientos de arbitraje o administrativos;
- VI. Evitar procedimientos de conciliación, mediación, o en modalidades terapéuticas de pareja, tal y como lo señala la Ley General;
- VII. Tener abordajes psicoterapéuticos exitosos y efectivos para disminuir el impacto de la violencia en las mujeres;
- VIII. Encaminarse al empoderamiento y autodeterminación de las mujeres; y
- IX. Ser aprobado por el Consejo Estatal, previo registró ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal.

ARTÍCULO 28.- Los Modelos a favor de las Mujeres en el Estado se integrarán al menos con los siguientes rubros:

- I. Objetivos generales y específicos;
- II. Área de intervención y percepción social;
- III. Metodología;
- IV. Estrategias;
- V. Acciones a implementar;
- VI. Metas cualitativas y cuantitativas;
- VII. Mecanismos de evaluación; y
- VIII. Medición de la efectividad.

ARTÍCULO 29.- La modalidad terapéutica que se determine, favorecerá la toma de decisión de las mujeres y desestimará la aceptación de la violencia con objetivos terapéuticos claros y precisos.

La atención jurídica, se enfocará hacia la restitución de los derechos de las mujeres, buscando la reparación del daño, mediante la indemnización del daño material y moral.

ARTÍCULO 30.- En el Estado se llevará un registro de los diferentes modelos que se implementen en las instituciones públicas en materia de atención, prevención, sanción y erradicación, con motivo del programa estatal respectivo, formando un inventario estatal de éstos, pudiendo registrar los modelos privados de las organizaciones civiles que así los soliciten.

CAPÍTULO II

DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN

ARTÍCULO 31.- Los modelos de prevención que implementen en el Estado y sus Municipios con miras a la detección de la violencia en sus distintos ámbitos y tipos identificarán:

- I. Los cambios conductuales que requieren los diferentes tipos de victimización en un esquema psicojurídico;
- II. Detección de factores de riesgo, y las circunstancias en las que se presentan;
- III. Intervención temprana y mediata a los determinados tipos y modalidades de la violencia;
- IV. Capacitación psicojurídica transversal de los servidores públicos del Estado y de los Poderes que se adhieran, así como de sus Municipios sobre esquemas de detección de factores de riesgo, por lo menos una vez al año.

ARTÍCULO 32.- La identificación de los factores protectores por cada uno de los tipos de victimización, a partir del impacto que genera la violencia de género, se integraran a los modelos preventivos de detección que se efectúen. Sin perjuicio de las estrategias de difusión y visibilización de la violencia de género y sus consecuencias individuales y colectivas.

CAPÍTULO III

DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN

ARTÍCULO 33.- La atención de la violencia familiar en el Estado y sus Municipios requiere:

I. Implementar modelos y modalidades psicoterapéuticas que no fomenten el control, dominio o ejercicio del poder de quien ejerce la violencia familiar, ni la dependencia de quien la vive, con aspectos clínicos y sociales en sus programas y objetivos terapéuticos;

II. Diseñar modelos de abordaje terapéutico que consideren la victimización de las mujeres como una circunstancia temporal y transitoria, lo cual se refleje en los objetivos terapéuticos respectivos, a fin de evitar la victimización terciaria;

III. La asistencia jurídica para las mujeres, en materia penal y administrativa, con consejería jurídica en los casos de derecho familiar;

IV. Orientarse hacia la obtención de la reparación del daño material y moral; y

V. Ausente de patrones estereotipados.

ARTÍCULO 34.- Los modelos de atención, podrán estructurarse a partir diferentes niveles que cada uno de los ejes plantea, pudiendo ser multimodal, de abordaje psicoterapéutico y jurídico; los cuales son dirigidos a mujeres que viven violencia o ha (sic) generadores que la producen.

ARTÍCULO 35.- Sólo se podrá prestar atención especializada a quien ejerza, provoque o genere la violencia familiar exclusivamente, con los siguientes lineamientos:

I. El modelo psicoterapéutico que se implemente será registrado y validado por dos instituciones públicas o privadas, en cuanto a su efectividad, metodología e ideología del mismo se realizará semestralmente;

II. Refrendo de los modelos;

III. Estar registrado en el Instituto de la Mujer Duranguense; y

IV. Contar con una institución pública o privada reconocida, que funja como supervisor clínico de los profesionales que proporcionan el apoyo psicoterapéutico.

ARTÍCULO 36.- Para la atención de la violencia en el ámbito laboral y escolar el Estado y los Municipios buscaran:

I. Convenios con el sector privado sobre la vigilancia sobre prácticas discriminatorias;

II. Monitorear permanentemente las buenas practicas y actividades educativas, en coordinación con las autoridades federales respectivas;

III. Incorporar a las actividades escolares, talleres temáticos, sobre discriminación y violencia de género.

ARTÍCULO 37.- En materia de atención a la violencia institucional y feminicida, el Estado y sus Municipios impulsarán:

I. Unidades en contra de la violencia de género, en todas las dependencias de la Administración Pública del Estado, que participen en el Consejo Estatal;

II. Un subprograma anual de capacitación y modificación conductual por secretaría o instancia administrativa para servidores públicos en materia de discriminación y género, el cual, se podrá hacer extensivo previa invitación al Poder Judicial del Estado.

ARTÍCULO 38.- Los modelos de abordaje terapéutico consideraran la victimización de las mujeres como una circunstancia temporal y transitoria y se:

I. Hará una valoración diagnostica inicial, de los síntomas que presenta y del impacto de las concepciones sociales en dicho síntomas;

II. Establecerá un plan terapéutico, con objetivos clínicos y psicosociales, que eviten la victimización terciaria;

III. Efectuaran los reportes de cada sesión, para el seguimiento, que se anexaran al expediente respectivo; y

IV. Determinará los mecanismos de la supervisión clínica.

ARTÍCULO 39.- Los Modelos que se diseñen e implementen para los Refugios de Mujeres que viven Violencia de Género, además de las reglas establecidas en el presente capítulo y de los derechos señalados en el artículo 6 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, deberán tomar en consideración los siguientes derechos:

I. El derecho de elección sobre las opciones de atención, previa recepción de la información veraz y suficiente que les permita decidir;

II. La recepción para ellas, y para sus hijos menores de edad, de los apoyos gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado y servicios médicos;

III. La capacitación, para que favorezca el desempeño de una actividad laboral;

IV. Las bolsas de trabajo para tener una actividad laboral remunerada en caso de que así lo soliciten; y

V. Flujograma de atención, incluyendo otras instancias; (sic)

CAPÍTULO IV

DE LOS REFUGIOS

ARTÍCULO 40.- Los Refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

ARTÍCULO 41.- Corresponde a los Refugios ubicados en el Territorio del Estado de Durango:

I. Aplicar el Programa;

II. Velar por la seguridad de las Mujeres que se encuentran en ellos;

III. Proporcionar a las Mujeres la Atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada;

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita;

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de Atención;

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia;

VII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentran en ellos.

ARTÍCULO 42.- Los Refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

I. Hospedaje;

II. Alimentación;

III. En caso de contar el Refugio se dotará a la víctima de vestido y calzado;

IV. Servicio Médico;

V. Asesoría Jurídica;

VI. Apoyo Psicológico;

VII. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;

VIII. Capacitación para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral; y

IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten.

ARTÍCULO 43.- La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo, por lo que cumplidos los tres meses será evaluada la condición de las víctimas por personal médico, psicológico y jurídico del Refugio en el que se encuentra, a efecto de continuar su permanencia en el Refugio.

ARTÍCULO 44.- En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.

ARTÍCULO 45.- Los Refugios, con perspectiva de género, tendrán objetivos fundamentales en sus modelos, independientemente de otros valores agregados:

I. La protección y seguridad de las mujeres y de sus menores hijos; y

II. La autonomía y empoderamiento de las mujeres.

Consecuentemente se impulsaran diversos niveles en la estructuración de dichos refugios, en atención a los objetivos señalados.

ARTÍCULO 46.- Los modelos de refugios deberán estar claramente diferenciados de los modelos de los centros o unidades de atención, con los cuales debe implementar la coordinación sistémica respectiva.

El objetivo de los modelos de refugios en la protección de la mujer que se encuentren en estado de riesgo, deberán estar claramente diferenciados de los modelos de los centros o unidades de atención, con los cuales debe implementar la coordinación sistémica respectiva.

ARTÍCULO 47.- Para el caso de los modelos que atiendan la violencia sexual, dentro o fuera del ámbito familiar, se considerara:

I. La violencia sexual que constituye delito así como aquella que es infracción administrativa, de conformidad con la legislación del Estado;

II. Acciones específicas para el hostigamiento sexual en el ámbito laboral y docente a partir de la subordinación jerárquica y el daño psicosocial generado en las mujeres; y

III. El acoso como práctica discriminatoria y de ejercicio de poder en ausencia de jerarquía, y con una igualdad aparente entre las partes.

CAPÍTULO V

DE LOS MODELOS DE SANCIÓN

ARTÍCULO 48.- Los Modelos de Sanción buscarán la efectiva e irrestricta aplicación de la Ley, que se relacionen con la discriminación y la violencia de género, consecuentemente se evaluará anualmente la aplicabilidad de las normas Estatales y Municipales, considerando:

I. Un Modelo Integral que analice el impacto y alcance de las normas, las dificultades estructurales para su aplicación;

II. El fortalecimiento de las disposiciones penales, civiles, de derecho familiar y administrativas;

III. Procedimientos ágiles, que no mermen el empoderamiento de las mujeres; y

IV. El Registro de los Modelos ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal.

CAPÍTULO VI

DE LOS MODELOS DE ERRADICACIÓN (SIC)

ARTÍCULO 49.- La Erradicación buscará la eliminación de la discriminación y la violencia de género, mediante las siguientes fases:

I. Preparación Comunitaria;

II. Acción ofensiva para la ejecución;

III. Consolidación de los objetivos alcanzados; y

IV. Conservación del estado obtenido.

ARTÍCULO 50.- Estableciéndose el tiempo en que habrán de implementarse y monitorear su efectividad, son Estrategias Fundamentales de la Erradicación:

I. El monitoreo de las zonas donde exista violencia de género arraigada o violencia feminicida;

II. La evaluación anual de servidores públicos adscritos a cuerpos de seguridad, procuración de justicia y los dedicados a la atención de la violencia de género; y

III. La armonización normativa y judicial en su completitud y la interpretación hermenéutica con perspectiva de género de éstas.

CAPÍTULO VII

DEL TRATAMIENTO A LOS AGRESORES O GENERADORES

ARTÍCULO 51.- Se podrá prestar atención especializada a quien ejerce, provoque o genere la violencia familiar exclusivamente, siempre y cuando se observen los siguientes lineamientos:

I. El modelo psicoterapéutico que se implemente sea registrado, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento;

II. Validado por dos instituciones públicas o privadas, en cuanto a su efectividad, metodología e ideología;

III. Refrendo de los modelos, semestralmente;

IV. Estar registrado en el Consejo Estatal; y

V. Contar con una institución pública o privada reconocida, que funja como supervisor clínico de los profesionales que proporcionan el apoyo psicoterapéutico y de la operación del modelo.

ARTÍCULO 52.- Todo modelo que se implemente para la atención y reeducación de los agresores o generadores de la violencia familiar deberán incluir en particular:

I. Análisis de las masculinidades y su impacto en la violencia;

II. Marco teórico explicativo de la violencia masculina;

III. Marco de abordaje teórico, terapéutico y su motivación;

IV. Modelo de intervención;

V. Metodología y Técnicas empleadas;

VI. Focos de atención;

VII. Objetivos generales y específicos del tratamiento; y

VIII. Plan terapéutico por cada sesión.

ARTÍCULO 53.- Constituye un trato desigual y discriminatorio, considerar que en el ejercicio de la violencia, de la víctima o receptora como del agresor o generador son circunstancias fortuitas y consecuentemente ambos son responsables de la dinámica de violencia, y el tratamiento para ambas partes, en igualdad de condiciones.

Consecuentemente toda atención jurídica privilegia la protección y seguridad de la víctima o receptora de la violencia de género, en tanto que la atención al agresor o generador buscará que este asuma la responsabilidad de sus actos. El tratamiento de este es en beneficio de la víctima o receptora.

ARTÍCULO 54.- Incurre en responsabilidad el servidor público, que habiendo detectado riesgo en la seguridad de las mujeres, dentro de un tratamiento reeducativo y psicoterapéutico o jurídico, de agresores o generadores, no de aviso de dicho riesgo a las autoridades competentes, para que estas tomen las medidas conducentes y emitan las órdenes de protección respectivas.

CAPÍTULO VIII

DEL REGISTRO DE MODELOS Y PROTOCOLOS

ARTÍCULO 55.- El Consejo Estatal llevará un registro de los diferentes modelos y protocolos que se implementen en las instituciones públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación, con motivo del Programa Estatal respectivo, formando un inventario estatal de éstos, pudiendo registrar los modelos privados de las organizaciones civiles que así los soliciten.

ARTÍCULO 56.- La Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal, a efecto sistematizar la información, del Banco Estatal de Datos, será la encargada de registrar los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, que se elaboren o articulen.

ARTÍCULO 57.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en efectuar el registro y consecuentemente el depósito de los modelos y protocolos a que hace alusión el artículo anterior, deberán presentar ante dicha Secretaria, por escrito, formato de registro, donde se indique con claridad:

- I. Eje de acción y nivel del mismo donde se inscribe la operación del modelo;
- II. Población a la cual se dirige;
- III. Mecanismos de seguimiento y evaluación;
- IV. Estrategias de intervención;
- V. Autoría intelectual individual o institucional, o ambas;
- VI. Permisos en su caso de publicación y difusión.

Dicho escrito se presentara en dos tantos, y debidamente numeradas las fojas que constituyan el cuerpo del modelo o protocolo.

CAPÍTULO IX

DE LA CAPACITACIÓN

ARTÍCULO 58.- Para garantizar un trato sin discriminación e idóneo, los servidores públicos deberán recibir:

- I. Capacitación permanente sobre perspectiva de género, derechos humanos y sobre la implementación y operación de la atención; y
- II. Contención del estrés que se genera a partir de proporcionar atención.

ARTÍCULO 59.- El subprograma de capacitación incluirá sin perjuicio de la capacitación en materia de perspectiva y violencia de género, a la Administración Pública Estatal.

- I. Capacitación y sensibilización del personal encargado de la Procuración e Impartición de Justicia en las materias que señala la ley;
- II. Capacitación y sensibilización de los diversos cuerpos policíacos y de seguridad que sean competentes para conocer cualquier tipo y modalidad de la violencia contra las mujeres.

Pudiéndose hacer extensiva al personal adscrito de las instituciones en el Estado que estén involucradas en la materia.

TÍTULO IV

DE LOS MECANISMOS GARANTES

CAPÍTULO I

DE LA ALERTA DE GÉNERO Y DEL AGRAVIO COMPARADO

ARTÍCULO 60.- Por alerta de Género se entiende la declaratoria que emite la autoridad federal competente, en un municipio o zona determinada, en donde las condiciones de violencia de género, pongan en riesgo a las mujeres del lugar.

Con motivo de la emisión de la alerta de género, en las condiciones y con los procedimientos que la Ley General señala, sobre una zona o municipio que se determine, el Consejo Estatal al ser notificado de la declaratoria de género tomara las siguientes medidas.

I. Designara un grupo de trabajo estratégico para analizar y determinar las acciones procedentes con la finalidad de eliminar la alerta de género, previa valoración de su procedencia;

II. Determinará la dependencia de la Administración Pública Estatal que será responsable del seguimiento de las acciones correctivas vinculadas a la alerta de género.

ARTÍCULO 61.- Para los efectos anticipados de cualquier agravio comparado, conformaran la mesa de Armonización Legislativa de Discriminación y Violencia de Género, el Instituto de la Mujer Duranguense, conjuntamente con la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, la misma formará parte del Consejo Estatal con el objeto de revisar trimestralmente los avances legislativos en el país, en la materia, a fin de evitar cualquier declaratoria de alerta de género, con motivo del agravio comparado.

El Agravio Comparado, implica un trato desigual de las mujeres dentro del marco jurídico del Estado, en relación con otro Estado e incluso de procedimientos y trámites de índole administrativa.

CAPÍTULO II

DEL OTORGAMIENTO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 62.- Las órdenes de protección son medidas de protección de carácter cautelar, precautorio y preventivo, que se otorgan con motivo del ejercicio de la violencia sexual y familiar en sus diversos tipos contra las mujeres o terceros que se encuentran en riesgo. Las órdenes de protección son:

I. Personalísimas;

II. Intransferibles;

III. De urgente aplicación;

IV. No causan estado sobre los bienes o derechos; y

V. Temporales.

ARTÍCULO 63.- Las órdenes de protección se tramitarán ante el juez que corresponda en materia penal, civil o familiar y en casos de urgencia a los Juzgados Administrativos, por parte de las mujeres o quien sus derechos represente, así como por el Ministerio Público.

ARTÍCULO 64.- Las Órdenes de Protección emergentes y preventivas serán solicitadas por la representación social, además de las víctimas directas e indirectas, de conformidad con el procedimiento y observancia que el código penal del Estado y el protocolo de actuación respectivo señale.

El Ministerio Público para la debida instrumentación de las órdenes de protección se auxiliara de la fuerza pública.

La autoridad jurisdiccional será la competente para revisar, autorizar o en su caso emitir la orden de protección respectiva, en el entendido de que su negativa, dilación u omisión será bajo su más estricta responsabilidad.

TÍTULO V

DEL CONSEJO ESTATAL Y PROGRAMA ESTATAL

CAPÍTULO I

DEL CONSEJO ESTATAL

ARTÍCULO 65.- Para los efectos de este Reglamento, el Consejo Estatal tendrá por objeto además del señalado por la Ley, la instrumentación de una coordinación única cuyo mecanismo facilite la articulación de los ejes de acción, sus instrumentos, servicios y políticas públicas, de conformidad con el programa estatal, que para tal efecto se apruebe, el cual establecerá la política estatal en la materia, para cumplir con los objetivos del Sistema Estatal.

Independientemente de que se pueda establecer vinculación con los otros tipos de poderes.

ARTÍCULO 66.- El Consejo Estatal tendrá cuatro comisiones, una por cada eje de acción, además de los consejos temáticos sobre violencia que se adhieran al mismo y la Mesa de Armonización Legislativa, a efecto de establecer la política estatal única en la materia.

Dichas comisiones estarán integradas por los miembros del Consejo Estatal, con arreglo a la ley y los que determinen los ordenamientos que crean los consejos temáticos, que mediante el acuerdo respectivo se adhieran a dicho Consejo.

ARTÍCULO 67.- Las comisiones del Consejo Estatal, serán:

- I. La Comisión de Prevención;
- II. La Comisión de Atención;
- III. La Comisión de Sanción;
- IV. La Comisión de Erradicación;
- V. Mesa de Armonización.

ARTÍCULO 68.- El Consejo Estatal se reunirá en el término señalado en el artículo 20 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, dichas sesiones ordinarias serán convocadas por lo menos con diez días de anticipación a la celebración de la misma, independientemente de que en la sesión de instalación, se apruebe el calendario anual.

Para el caso de las sesiones extraordinarias se convocarán con cinco días de anticipación a la celebración de la misma y la orden del día versará sobre asuntos de extrema urgencia, y en los casos de:

- I. Declaratoria de Género;
- II. Agravio comparado; y
- III. Controversias no previstas en la Ley y su reglamento.

CAPÍTULO II

DEL PROGRAMA ESTATAL

ARTÍCULO 69.- El Programa Estatal se estructura a partir de los cuatro ejes de acción, y en cada uno de ellos se señalará, al menos los siguientes rubros:

I. Los Objetivos Generales y Específicos;

II. Las Estrategias;

III. Las Líneas de Acción;

IV. Indicadores;

V. Las Metas Cuantitativas y Cualitativas;

VI. Los Responsables de Ejecución; y

VII. Los Mecanismos de Evaluación.

ARTÍCULO 70.- Para la recepción de la información que integrara los informes, la Secretaría Ejecutiva de Consejo Estatal, establecerá los formatos, instrumentos y mecanismos que convengan para dar seguimiento y evaluación al programa estatal y deberá contener:

I. Los avances semestrales cuantitativos y cualitativos, realizados por las instancias del Gobierno Estatal y de los Municipios;

II. El informe de seguimiento de las acciones emprendidas por dichas instancias en el Estado;

III. Establecer los mecanismos y formatos para llevar a cabo el seguimiento trimestral de los avances del programa estatal; e

IV. Integrar y elaborar el informe anual cualitativo y cuantitativo que dé cuenta de los avances del programa estatal y elaborar propuesta de informe respectivo.

ARTÍCULO 71.- Las acciones del Programa Estatal se articularan en los ejes de acción respectivos, tomado en consideración:

I. Un Diagnóstico general de todas y cada una de las modalidades de la violencia en el Estado;

II. Objetivos y estrategias por cada uno de los cuatro ejes de acción;

III. Estrategias y líneas de acción;

IV. Establecimiento de subprogramas de capacitación focales por tipo de población;

V. Planeación de investigaciones significativas a implementar que resulten en la determinación de qué políticas públicas se implementarán, incluyendo los indicadores respectivos;

VI. Un programa de promoción para el establecimiento de refugios y albergues para mujeres y afectados por la violencia de género;

VII. Un programa de vinculación institucional que contenga los servicios gubernamentales y no gubernamentales que se dé a las mujeres en el Estado, a fin de optimizar los recursos;

VIII. La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias similares en las demás Entidades Federativas en la República Mexicana;

IX. La propuesta de una estrategia de colaboración interinstitucional;

X. La elaboración de códigos de ética para desarrollar los ejes de acción por parte de los miembros del Consejo Estatal; y

XI. Los mecanismos específicos para la evaluación global de acciones, estrategias y objetivos del programa.

TÍTULO VI

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I

DE LA INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 72.- El Consejo Municipal es el órgano. honorario de apoyo normativo, consultivo, evaluación y coordinación de acciones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Genero:

ARTÍCULO 73.- El Consejo Municipal se integrará por:

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será la Directora del Instituto Municipal de la Mujer;

III. El Síndico Municipal;

IV. El Secretario del Ayuntamiento;

- V. El Director del DIF Municipal;
- VI. El Director Municipal de Desarrollo Social o su equivalente;
- VII. El Director de Seguridad Pública Municipal;
- VIII. El Ministerio Público Adscrito al Municipio;
- IX. Dos Regidores, que serán nombrados por el Ayuntamiento.

Podrán participar en las sesiones del Consejo Municipal, organismos sociales, organizaciones no gubernamentales o expertos reconocidos en la materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, quienes tendrán sólo derecho a voz.

ARTÍCULO 74.- El Consejo Municipal tendrá las siguientes funciones:

- I. Aprobar el Programa Municipal, así como vigilar su aplicación y cumplimiento;
- II. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre las instituciones que lo integran;
- III. Conocer y evaluar semestralmente en las sesiones ordinarias respectivas, los logros y avances del programa municipal;
- IV. Recibir el informe anual que presentará la Secretaria Ejecutiva a que hace referencia el artículo 24 de esta Ley, haciendo las observaciones y recomendaciones necesarias;
- V. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que realicen acciones en materia de violencia de género en el ámbito de su respectiva competencia;
- VI. Fomentar campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la población sobre las formas en que se expresa y se puede prevenir y combatir la violencia de género, en coordinación con los organismos competentes; y
- VII. Promover acciones para prevenir la violencia de género, incorporando a la población en la operación de los programas municipales.

ARTÍCULO 75.- El Presidente del Consejo Municipal, tendrá las siguientes facultades:

- I. Celebrar acuerdos y convenios cuando sea necesario, con dependencias, entidades públicas y privadas, así como con instituciones sociales y educativas, para la coordinación de acciones a nivel municipal;

II. Citar a sesiones; y

III. Llevar un registro de la información estadística sobre violencia de género en el municipio, para integrar el Banco Estatal de Datos.

ARTÍCULO 76.- La Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal, tendrá las facultades que establece el artículo 23 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, en el ámbito de su competencia.

CAPÍTULO II

DE LAS SESIONES

ARTÍCULO 77.- El Consejo Municipal celebrará dos sesiones ordinarias anualmente y las extraordinarias que se requieran, a convocatoria de su Presidente.

Los acuerdos se tomarán mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, quién presida tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 78.- Por cada Consejero Propietario, se designará un suplente que lo substituya en sus faltas temporales.

ARTÍCULO 79.- De cada sesión celebrada deberá levantarse acta correspondiente, siendo esta signada por cada uno de los asistentes.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los treinta días siguientes a su publicación, se articulara el registro de modelos a que hace alusión este reglamento.

Durango, Durango 30 de noviembre de 2011

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

C.P. JORGE HERRERA CALDERA
Gobernador Constitucional del Estado

ING. HECTOR VELA VALENZUELA
Secretario General de Gobierno

PROFR. JAIME FERNANDEZ SARACHO
Secretario de Desarrollo Social